



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D. C., veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

RADICADO: 11001-33-35-026-2017-00167-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: SAÚL ENRIQUE FERNÁNDEZ VÁSQUEZ
DEMANDADO: FONDO DE PASIVO SOCIAL-
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Magistrado Ponente: Magda Victoria Acosta Walteros, que mediante providencia de 13 de septiembre de 2018, **RESOLVIÓ:**

***"PRIMERO:** DIRIMIR el conflicto negativo surgido entre las Jurisdicciones Ordinaria y Contencioso Administrativa, respecto de la demanda Ordinaria Laboral incoada mediante apoderado por el señor SAÚL ENRIQUE FERNÁNDEZ VÁSQUEZ, contra el FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, le corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa en este caso representada por el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral de Bogotá- Sección Segunda, acorde con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído. En consecuencia, procédase al envío inmediato del expediente a ese Despacho Judicial para que continúe con el conocimiento del asunto.*

***SEGUNDO: REMÍTASE** copia de esta providencia al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, para su información."*

En cumplimiento de lo ordenado por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, es procedente continuar con el trámite del proceso; y en tal virtud, se observa que el señor **SAÚL ENRIQUE FERNÁNDEZ VÁSQUEZ**, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la **FONDO DE PASIVO SOCIAL-FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**, con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago de pensión de jubilación, y la indexación de la primera mesada pensional a partir del 28 de noviembre de 1984.

Pues bien, analizado el escrito introductorio, este Despacho observa que no es posible en este momento dar trámite a la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

El Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162. *Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:*

1. ***La designación de las partes y sus representantes.***
2. ***Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.***
3. ***Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.***
4. ***Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.***
5. ***La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.***
6. ***La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.***
7. ***El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”***

Así mismo, el artículo 166 ibídem, señaló que la demanda debe venir acompañada, entre otros, de la copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, de los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, y las copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público.

Dicho precepto debe entenderse concordante con el art. 612 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011. Visto esto y al realizar una revisión de tales requisitos, se pudo establecer que la demanda y los anexos, no cumplen con la totalidad de los mismos, como se indica a continuación:

i. Del derecho de postulación.

El Capítulo I de este ordenamiento, consagra lo aspectos relativos a la capacidad, representación y ejercicio del derecho de postulación, sobre este último aspecto el artículo 160 dispuso:

“Artículo 160. Derecho de postulación. *Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.*

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo.”

Ahora bien, como quiera que el C.P.A.C.A., no consagra lo relativo a la formalidad que deben cumplir los poderes que se presenten ante esta jurisdicción, se hace necesario acudir a la Ley 1564 de 2012 para estudiar este derrotero, ello en aplicación de la remisión que consagra el art. 306 de la Ley 1437 de 2011 al Código de Procedimiento Civil, hoy Cogido General del Proceso.

En tal virtud, el artículo 74 del C.G.P., en materia de otorgamiento de poder a los profesionales del derecho para actuar en procesos judiciales, estableció:

“Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. **En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.**

El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas. (...)”

Negrillas del Despacho

Analizado el expediente, se hace necesario conminar al profesional del derecho, a fin de que determine e identifique claramente el objeto para el cual fue conferido el poder, los actos administrativos susceptibles del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y señalar para el efecto, las facultades con las que actuará dentro del presente proceso. Lo anterior en razón a que el poder especial conferido, obrante a folio 1° del expediente, fue conferido para el conocimiento de los jueces laborales, y por tanto, no fueron preceptuadas las anotaciones anteriormente realizadas.

ii. Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 138 del C.P.A.C.A., el profesional del derecho, quien representa los intereses de la demandante, deberá adecuar la demanda al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Requisito con el que deberá cumplir a efectos de solicitar el restablecimiento del derecho, respecto de las consecuencias acaecidas del acto administrativo por medio del cual le fue negada la pensión de jubilación.

Para el cumplimiento de lo anteriormente descrito, el apoderado de la parte actora, deberá presentar el escrito demanda, dentro del presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme lo preceptuado en el artículo 162 “Contenido de la Demanda” de la Ley 1437 del 2011. Escrito en el que se deberá preceptuar: 1. *La designación de las partes y sus representantes.* 2. *Las pretensiones, formuladas con precisión y claridad.* 3. *Los hechos y omisiones que servirán de fundamentos a las pretensiones a incoar, y las demás observaciones que se realizaran en la continuación de la parte motiva del presente auto.*

iii. Del concepto de violación de las normas

De conformidad con el numeral 4º del artículo 162 del C.P.A.C.A., la demanda debe contener *“Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.”*.

Bajo el anterior precepto, y una vez analizado el expediente¹, encuentra el Despacho que en la demanda, no se indicaron ni especificaron, en debida forma, las normas violadas y su concepto de violación. Motivo por el cual, el profesional del derecho, deberá reformular los fundamentos de derecho en los cuales fundamenta el presente medio de control.

Lo anterior, en concordancia con las disposiciones Consejo de Estado, en las que establece que cuando la demanda que tiene por objeto el estudio de legalidad de un acto administrativo, **debe contener un capítulo especial en el que se señalen las normas violadas y se explique el concepto de su violación**. Este último requisito es consecuencia del carácter de rogada de la justicia contenciosa, que le impide al juez realizar un estudio de legalidad con normas no invocadas en la demanda, pues las expresiones *“fundamentos de derechos que se invocan como vulnerados”* y *“concepto de violación”*, constituyen el marco dentro del cual puede y debe moverse el juez administrativo para desatar la controversia. ²

iv. De la estimación razonada de la cuantía

Pues bien, analizado el expediente, encuentra el Despacho que si bien dentro del escrito de demanda se estipuló lo concerniente a la estimación razonada de la cuantía, esta no fue preceptuada en debida forma, toda vez que se indicó *“estimo que la cuantía de esta demanda es mayor a veinte (20) salarios mínimos legales vigentes”*.

Frente a este punto, recuerda el Despacho, que mediante providencia del 20 de abril de 2015, proferida dentro del radicado 11001-03-15-000-2014-02729-01, el Consejo de Estado se pronunció en torno a la aplicación de las reglas de competencia definidas frente al presupuesto procesal de la cuantía, ratificando que es deber del juez verificar dicho elemento al momento de admitir la demanda, señalando que son aplicables de manera preferente las disposiciones jurídicas que frente a esta materia contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recuerda el Despacho, que el artículo 155 de la ley 1437 de 2011, señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia, refiriéndose en el numeral 2º específicamente a los de carácter laboral.³

¹ Folios 2 a 7 del plenario.

² CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, C.P. GUILLERMO VARGAS AYALA, sentencia del cinco de mayo de 2019, RADICACIÓN No: 25000232400020100026001

³ **“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:(...) 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que para la fecha de presentación de la demanda, el salario mínimo legal mensual vigente aprobado por el Gobierno Nacional es de \$ 737.717., luego entonces, al realizar la operación matemática, tenemos que los 50 S.M.L.M.V. determinados en la norma precitada, equivalen a la suma de \$36.885.850.00. Valor sobre el cual deberá estimar la cuantía la parte demandante.

Así mismo, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 157 de la misma Ley, la cuantía deberá calcularse **desde cuando se causaron los derechos y hasta la presentación de la demanda sin que supere los tres años, y sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios**, que causen con posterioridad a la presentación de la demanda.

Así las cosas, y en virtud de las consideraciones anteriores, la demanda presentada por el apoderado judicial de la actora, no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de la Ley 1437 del 2011, 1450 del 2011 y 1564 del 2012, normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa.

Por lo expuesto, el Despacho,

R E S U E L V E



PRIMERO.- INADMITIR LA DEMANDA promovida por **SAÚL ENRIQUE FERNÁNDEZ VÁSQUEZ**, en contra de la **FONDO DE PASIVO SOCIAL-FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá allegar en medio magnético la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez


JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 28 DE MAYO DE 2019 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)
 LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA

